

Beneficios y retos de programas Ingreso Básico (Universal): Aportes para proyecto piloto en Puerto Rico**Benefits and challenges (Universal) Basic Income programs: Contributions to a pilot project in Puerto Rico****Recibido:** 10 de diciembre de 2025**Aceptado:** 7 de abril de 2026**Publicado:** 23 de mayo de 2026

Tania García Ramos¹, Julián Laboy Rodríguez², Jormy Figueroa Avilés³, Bianelle Vélez Cuprill³, Michael García Camilo³, Victoria Muñiz García-Rodríguez⁴, Cristina Alejandro Ruiz³
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
Universidad Carlos Albizu, Recinto de San Juan

Resumen

Este artículo analiza los beneficios y retos de seis programas de Ingreso Básico Universal (IBU) e Ingreso Básico (IB) implementados en seis continentes, mediante una revisión documental con análisis de contenido temático. Estos programas incluyen Kenia, Alaska, Brasil, Irán, Barcelona y Nueva Zelanda y permiten identificar patrones transversales y diferencias. Los beneficios incluyen la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de la seguridad económica y las mejoras en el bienestar, la salud mental, la autonomía y la cohesión social. Los retos integran la sostenibilidad financiera, la condicionalidad y la gobernanza. Desde la Psicología del Trabajo y las Organizaciones, el IBU y el IB, aunque distintos, son dispositivos psicosociales de seguridad material con potencial para mitigar la precariedad económica en contextos de transformación del trabajo, de pobreza y de desigualdad. Las autorías concluyen que explorar un proyecto piloto de IBU en Puerto Rico constituye una línea futura de investigación aplicada.

Palabras clave: Ingreso Básico Universal; Ingreso Básico; pobreza y desigualdad; Puerto Rico; Psicología del Trabajo y las Organizaciones

¹ Ph.D. en Psicología Social por la Universidad Complutense de Madrid, España. Catedrática del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP). Fundó en 2012 el Grupo de Psicología Crítica del Trabajo de este departamento, en el que se estudian temas como la crisis del trabajo y sus alternativas, el IBU y la precariedad laboral desde una perspectiva decolonial e interseccional. Desde hace 29 años es docente en Psicología del Trabajo y las Organizaciones (PTO) desde una perspectiva histórica, psicosocial y crítica. La correspondencia relacionada con este artículo debe ser dirigida a: tania.garcia@upr.edu. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6491-9249>.

² Ph.D. en Psicología, con énfasis en Psicología Industrial-Organizacional. Catedrático auxiliar y coordinador del Programa Graduado de Psicología en la UPR-RP. ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-2174-7594>.

³ Estudiante a nivel graduado en PTO en la UPR-RP.

⁴ Estudiante a nivel graduado en Psicología Industrial-Organizacional en la Universidad Carlos Albizu.

Abstract

This article presents a comparative analysis of the benefits and challenges of six Universal Basic Income (UBI) and Basic Income (BI) programs implemented across six continents, using a qualitative documentary review and thematic content analysis. The programs include Kenya, Alaska (United States), Brazil, Iran, Barcelona (Spain), and New Zealand, identifying transversal patterns and differences. Benefits indicate consistent effects on poverty reduction, economic security, and improvements in well-being, mental health, autonomy, and social cohesion, alongside structural limitations related to financial sustainability, conditionality, and governance. From a Work and Organizational Psychology perspective, UBI and IB programs, although different, are understood as psychosocial mechanisms for material security that can mitigate economic hardships amid work transformations, poverty, and inequality. The authors conclude by proposing the exploration of a context-sensitive UBI pilot in Puerto Rico as a future line of applied research.

Keywords: Universal Basic Income; Basic Income; Poverty and Social Inequality; Puerto Rico; Work and Organizational Psychology

En este estudio analizamos de forma comparativa los beneficios y los retos de los programas de Ingreso Básico Universal (IBU) e Ingreso Básico (IB) en seis continentes. Definimos y distinguimos a continuación el IBU y el IB. El IBU se define como un estipendio monetario regular, individual e incondicional, otorgado a todas las personas residentes o ciudadanas de un país o estado independientemente de su situación socioeconómica y de que tengan o no empleo; por tanto, se considera universal. En contraste, el IB se refiere a un estipendio monetario regular otorgado por un periodo definido a grupos de personas específicos de un país o estado según criterios de nivel de ingresos, vulnerabilidad u otras condiciones; por tanto, se considera condicionado (García-Ramos, 2014; García-Ramos & Morales, 2022; Jaatinen, 2022). El IBU e IB han sido implementados en seis continentes para evaluar su potencial para mitigar la pobreza y la desigualdad, así como sus beneficios psicosociales. En el caso de Puerto Rico, territorio incorporado de Estados Unidos (EU), nos motiva identificar los aportes de los programas examinados para llevar a cabo un proyecto piloto de IBU.

A partir de una revisión documental, se examinan seis programas de IBU e IB en seis continentes —Kenia, Alaska (EU), Brasil, Irán, Barcelona (España) y Nueva Zelanda— seleccionadas por su diversidad geográfica, institucional y de diseño. El análisis se organiza en torno a los beneficios transversales y a los límites estructurales de estos programas, y se interpreta desde el marco de la Psicología del Trabajo y las Organizaciones (PTO), con énfasis en dimensiones como la seguridad económica, el bienestar, la salud mental, la autonomía y la agencia laboral. Finalmente, discutimos las implicaciones de estos hallazgos para el estudio futuro del trabajo y exploramos la posibilidad de avanzar hacia un piloto de IB y, eventualmente, hacia un modelo de IBU en Puerto Rico, como una línea de investigación aplicada.

Transformaciones del trabajo, automatización y desigualdad

Las transformaciones tecnológicas del trabajo han acompañado históricamente el desarrollo social. En las primeras décadas del siglo XXI, estas transformaciones han alcanzado una velocidad y una profundidad que reconfiguran sustancialmente el mundo del trabajo. John Maynard Keynes advirtió que el progreso técnico podía generar desempleo tecnológico, entendido como la incapacidad de las economías para absorber mano de obra a la misma velocidad en que aumentaba la productividad (Canals, 2017). Aunque Keynes anticipaba que estas dinámicas podrían traducirse en reducciones de la jornada laboral y en mayores niveles de bienestar a largo plazo, reconocía la necesidad de ajustes sociales profundos para evitar efectos regresivos.

Décadas más tarde, Gorz (1995) profundizó en este asunto al plantear la crisis del trabajo asalariado como eje organizador de la vida social contemporánea. Para este autor, la automatización y la racionalización productiva erosionan estructuralmente la posibilidad del empleo para garantizar ingresos, identidad y cohesión social. En este sentido, el trabajo

asalariado deja de ser un mecanismo suficiente de integración social, lo que obliga a repensar el vínculo entre el empleo, el ingreso y la ciudadanía.

En el contexto contemporáneo, la expansión de la robótica, la inteligencia artificial y la digitalización de los procesos de trabajo ha reactivado estas discusiones (Georgieva, 2024; Ivanov et al., 2025; Kvirchishvili, 2024; OECD, 2024; Zamani et al., 2022). Floridi (2014) retoma la discusión sobre el desempleo tecnológico para señalar que la automatización no solo elimina ocupaciones específicas, sino que también transforma la estructura del mercado laboral, intensificando la polarización del empleo y la precarización de amplios sectores. La reducción del empleo en áreas como la manufactura y la expansión de formas de trabajo inestables en el sector de servicios evidencian que los beneficios del progreso tecnológico se distribuyen de manera desigual, lo que genera una inseguridad económica persistente para amplios grupos de la población.

Organismos internacionales han advertido que estos procesos pueden profundizar las desigualdades sociales si no se acompañan de políticas redistributivas robustas (OECD, 2024; World Economic Forum, 2023). Proyecciones recientes estiman que una proporción significativa de los empleos podría verse afectada por la automatización, particularmente en países y territorios con mercados laborales frágiles (Bag, 2023; Bhargava et al., 2021). Este contexto representa un reto para la PTO, ya que estas transformaciones pueden traducirse en niveles más altos de incertidumbre y estrés laboral, así como en el deterioro del bienestar psicológico y en el debilitamiento de la agencia de las personas trabajadoras frente a condiciones laborales precarias.

Este escenario adquiere particular relevancia en el caso de Puerto Rico, donde las transformaciones del trabajo se superponen a una pobreza y desigualdad estructurales persistentes y a una elevada fragilidad del mercado laboral. Entre 2019 y 2023, el 38.2 % de las

familias y el 51.6 % de los menores de 18 años vivían bajo el umbral de pobreza, con una alta dependencia de programas de asistencia pública para cubrir necesidades básicas (SCD-PR Bulletin, 2025). En el ámbito laboral, aunque la tasa de desempleo se ha reducido alcanzando un 5.7 % en noviembre de 2025, Puerto Rico continúa presentando una de las tasas de participación laboral más bajas de E.U. (45.2 %), con más de 1.5 millones de personas fuera del grupo trabajador (Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, 2026). El desempleo histórico, desde 1979 hasta febrero de 2018, fue de dos cifras: 10% o más. Esta combinación de baja participación laboral, desempleo histórico prolongado y la emigración sostenida limita que el mercado laboral absorba la fuerza de trabajo disponible agravando la inseguridad económica.

En síntesis, el problema central no radica en la tecnología en sí misma, sino en su inserción en sistemas económicos caracterizados por profundas desigualdades estructurales, como el de Puerto Rico, que tiene el coeficiente de Gini más alto de Estados Unidos: 0.545 (Hinojosa et al., 2023) y uno de los más altos en el mundo (Colón Reyes, 2023). Este coeficiente es una medida estadística que calcula el grado de desigualdad en la distribución de ingresos en una población con valores de 0 (desigualdad mínima) a 1 (desigualdad máxima) y se utiliza para el diseño de políticas de redistribución de riqueza. En otras palabras, el coeficiente evalúa qué tan concentrada está la riqueza; un valor cercano a 0 indica distribución equitativa, mientras que cerca de 1 indica que pocos tienen casi todo.

La desigualdad estructural ha permanecido en Puerto Rico durante los últimos 10 años, de 2016 a 2025 (Segarra Alméstica, 2026). Esta desigualdad implica que ciertos grupos han sido discriminados y sistemáticamente excluidos del acceso a recursos y oportunidades por las instituciones (i.e leyes, políticas, educación, economía). La automatización, cuando opera sin mecanismos de redistribución, tiende a reforzar la precarización laboral, la inseguridad

económica y la profundización de la pobreza. Este escenario plantea la necesidad de explorar políticas sociales que garanticen condiciones materiales mínimas para el bienestar individual y colectivo, más allá del acceso inmediato a un empleo.

Ingresos básicos como dispositivos psicosociales frente a la pobreza

En paralelo a estas transformaciones del trabajo, la pobreza y la desigualdad continúan siendo desafíos centrales tanto a nivel global como local. En las últimas décadas se ha observado en Puerto Rico una creciente concentración de la riqueza en propietarios del capital, de 34.1% en 2005 a 50.1% en 2023, versus un decrecimiento en la de empleados, de 65.9% en 2005 a 49.9% en 2023 (Ríos González, 2024). Esta brecha se asocia con la expansión de formas de pobreza que no pueden explicarse únicamente por el nivel de ingresos, sino por la acumulación de privaciones en ámbitos como la salud, la educación, la vivienda y el acceso a servicios básicos. En este sentido, los enfoques contemporáneos de pobreza multidimensional han puesto de relieve que la inseguridad material afecta de manera acumulativa y persistente a poblaciones históricamente marginadas.

En este contexto, los programas de IBU e IB han sido propuestos como potenciales para combatir la pobreza, la desigualdad y los posibles efectos del desempleo por la automatización (García-Ramos & Morales, 2022; Jaatinen, 2022; Ramírez, 2023). Más allá de su dimensión económica, ambos son políticas sociales que buscan garantizar un piso mínimo de seguridad material que permita a las personas satisfacer necesidades básicas, reducir la exposición al estrés financiero crónico y ampliar su capacidad para tomar decisiones significativas sobre su educación, su trabajo y su participación social.

Desde esta perspectiva, el IBU y el IB pueden entenderse como dispositivos psicosociales de seguridad material. Al proporcionar un ingreso regular, periódico, predecible y relativamente

desvinculado del empleo inmediato, estos programas pueden ser herramientas para fortalecer el bienestar subjetivo, la autonomía personal y la percepción de control sobre la propia vida. Estas dimensiones resultan centrales para la PTO, ya que influyen directamente en el bienestar general, la motivación y el desempeño laboral de las personas (Blustein, 2006; Hüffmeier & Zacher, 2021; Jahoda, 1982).

La literatura en PTO ha mostrado de manera consistente que la inseguridad económica constituye un predictor relevante de estrés, ansiedad y agotamiento emocional (Sverke et al., 2002). En consecuencia, políticas que reduzcan la incertidumbre material pueden tener efectos directos e indirectos sobre el bienestar psicológico y las trayectorias laborales. Desde esta óptica, los ingresos básicos no deben analizarse únicamente como mecanismos de alivio económico, sino como intervenciones estructurales con potencial de impacto en las condiciones psicosociales en las que se desarrollan las personas y sus actividades laborales.

PTO, justicia social y el futuro del trabajo

A pesar de sus beneficios potenciales, la discusión sobre el IBU ha ocupado históricamente un lugar marginal en la PTO. Hüffmeier y Zacher (2021) señalan que esta omisión resulta llamativa en tanto que el IBU cuestiona uno de los supuestos centrales del campo: la dependencia del ingreso proveniente del empleo como fuente principal de seguridad económica y de significado personal. Para estas autorías, incorporar el análisis del IBU a la agenda de investigación en PTO resulta fundamental para comprender las transformaciones contemporáneas del trabajo, así como sus posibles implicaciones y respuestas.

El IBU e IB tienen implicaciones directas en dimensiones clave como la autonomía, la motivación y la agencia laboral. Al reducir la presión económica extrema, las políticas de IBU e IB pueden facilitar formas de motivación más autónomas, basadas en el interés, el sentido y la

congruencia entre los valores personales y las actividades laborales. Asimismo, pueden ampliar la concientización de las personas para no aceptar empleos precarios, destacar la importancia de invertir en la educación o emprender transiciones ocupacionales, reforzando su agencia frente a mercados laborales altamente inestables (Hüffmeier & Zacher, 2021; Ortiz, 2023).

Estos planteamientos se articulan con enfoques de justicia social que advierten que la automatización y la digitalización afectan de manera heterogénea a las poblaciones. Autorías han señalado que los sistemas tecnológicos tienden a profundizar las desigualdades, reproduciendo formas de explotación, marginación y carencia de poder (Kabeer, 2021; Meyer & Hamilton, 2020; Ortiz, 2023; Zajko, 2022). En este escenario, el IBU puede convertirse en un amortiguador estructural que reduce la exposición diferenciada de las personas trabajadoras a los riesgos asociados a la transformación tecnológica.

Pensar el futuro del trabajo desde una PTO crítica implica trascender una mirada centrada exclusivamente en el empleo y considerar políticas que redistribuyan materialmente los beneficios de la productividad tecnológica. En este marco, el IBU e IB abren la posibilidad de repensar la relación entre trabajo, bienestar y ciudadanía, reconociendo actividades de contribución social invisibilizadas, como el cuidado, el voluntariado y la participación comunitaria.

La inclusión de programas de IB en este estudio se debe a dos razones principales. En primer lugar, en regiones como América Latina, históricamente predominan los esquemas focalizados, lo que limita la disponibilidad de experiencias plenamente universales con resultados documentados. En este sentido, se ha señalado que la evidencia empírica disponible sobre ingresos básicos proviene necesariamente de pilotos o programas no universales, cuya comparación resulta indispensable para informar los diseños futuros (Ramírez, 2023).

En segundo lugar, el análisis comparativo de programas de IBU e IB permite identificar beneficios y retos comunes, así como diferencias asociadas al diseño institucional, y aporta valor analítico al debate académico. Si bien el énfasis de este estudio recae en el IBU como horizonte normativo y analítico, se incorporan programas de IB cuando estos constituyen experiencias empíricas relevantes en determinados contextos regionales, evitando así errores conceptuales y fortaleciendo la coherencia del análisis.

Objetivos del estudio

A partir de los planteamientos anteriores, este estudio tiene los siguientes objetivos: (a) identificar los principales beneficios de programas de IBU e IB implementados en seis continentes; (b) analizar los retos asociados a su diseño, implementación y sostenibilidad; (c) interpretar estos resultados desde el marco de la PTO, considerando las implicaciones de estos programas para el bienestar, la autonomía y las condiciones psicosociales del trabajo; y (d) derivar criterios analíticos que orienten la exploración de un posible piloto de IB e IBU en Puerto Rico.

Método

Diseño

A través del estudio, empleamos un enfoque cualitativo de revisión documental, sustentado en el análisis de contenido temático. El propósito fue identificar y analizar sistemáticamente los beneficios y retos asociados a programas de Ingreso Básico Universal e Ingreso Básico implementados en distintos contextos geográficos. A diferencia de una revisión narrativa tradicional, el estudio siguió un procedimiento sistemático de selección, organización y análisis de documentos.

Documentos

La muestra documental estuvo compuesta por 53 materiales bibliográficos publicados entre 2008 y 2025, incluyendo artículos en revistas arbitradas, libros académicos, informes gubernamentales y documentos emitidos por organizaciones profesionales. Los programas seleccionados responden a experiencias ubicadas en 6 continentes distintos: Kenia, Alaska (Estados Unidos), Brasil, Irán, Barcelona (España) y Nueva Zelanda. La selección documental respondió a tres criterios de inclusión previamente establecidos. En primer lugar, se incluyeron materiales publicados de programas de IBU e IB en los foros anteriores. Estos programas debían tener al menos un año de funcionamiento para asegurar la observación y publicación de resultados y beneficios ya consolidados tras la fase de implementación inicial. En segundo lugar, se seleccionaron materiales bibliográficos publicados entre 2008 y 2025; lo que permitió analizar el impacto de estos programas frente a transformaciones tecnológicas recientes y crisis locales y globales contemporáneas, priorizando literatura arbitrada e informes oficiales para garantizar la validez y calidad de la evidencia. Tercero, utilizamos un criterio de diversidad geográfica, seleccionando al menos un programa por continente; esto se fundamenta en la necesidad de realizar una comparación transversal que identifique patrones de impacto en temas de pobreza, desigualdad o la identificación de beneficios psicosociales, así como sus retos, independientemente de los contextos institucionales particulares.

Como criterios de exclusión destacamos: (a) materiales o documentos grises sin respaldo de entidades oficiales o académicas; (b) materiales o documentos puramente teóricos o de opinión que no presentaran resultados de implementaciones empíricas; y (c) programas de asistencia social que no se alinearan con la definición técnica de IBU e IB presentada en la introducción de este trabajo. La Tabla 1 presenta una síntesis de los seis programas

seleccionados, indicando el país, la ciudad o el estado de implementación, el tipo de programa (IBU o IB), su duración aproximada, la población cubierta y el rasgo distintivo más relevante para el análisis comparativo.

Tabla 1

Programas de Ingreso Básico Universal e Ingreso Básico analizados

País /Ciudad o Estado	Tipo de programa	Duración	Población cubierta	Rasgo distintivo
Kenia	IB	2016–2028	Hogares rurales en Siaya y Bomet	Diseño experimental de largo plazo con múltiples modalidades de pago.
Alaska (EE. UU.)	IBU	1982– presente	Toda la población residente	Fondo soberano financiado por recursos naturales.
Brasil	IB	2003– presente	Hogares en pobreza y pobreza extrema	Programa nacional de transferencias monetarias de gran escala.
Irán	IBU	2010–2015	~96 % de la población nacional	Implementación universal a gran escala en periodo acotado.
Barcelona (España)	IB	2017–2019	Hogares en barrios vulnerables	Integración del ingreso con políticas activas de inclusión social.
Nueva Zelanda	IB	1977– presente	Personas elegibles según sistema tributario	Modelo híbrido vinculado al sistema fiscal.

Procedimiento

El procedimiento de la revisión documental lo desarrollamos en cuatro fases organizadas de manera secuencial y orientadas a garantizar un análisis sistemático de los programas de IBU e IB seleccionados. En la **primera fase** realizamos la identificación, recopilación y familiarización con los documentos seleccionados. Este proceso incluyó la revisión de artículos arbitrados, libros académicos, informes gubernamentales y documentos de organizaciones profesionales relacionados con programas de IBU e IB. Asimismo, organizamos los materiales según criterios

de diversidad geográfica, tipo de programa, duración, población cubierta y características de implementación. Además, 22 de estos 53 materiales se utilizaron para la construcción del corpus específico de cada uno de los seis programas de IBU e IB analizados que describe su diseño, contexto y resultados. Estos materiales respondían a los objetivos del estudio y, por motivos de espacio, se incluyeron mediante un muestreo intencional orientado a maximizar la diversidad regional y programática, así como la variación en los enfoques de implementación, conforme a los criterios de selección definidos para el estudio. Esta fase permitió desarrollar una comprensión inicial de los contextos sociales, económicos y políticos en los que se implementaron los programas analizados.

La **segunda fase** consistió en la generación de códigos iniciales y en la organización preliminar de la información. Durante esta etapa identificamos segmentos relevantes de los documentos vinculados con los objetivos del estudio y con el marco teórico de la investigación. Las categorías principales fueron: (a) reducción de la pobreza y seguridad económica, (b) salud y bienestar, (c) autonomía en decisiones laborales y educativas, (d) cohesión social y (e) retos estructurales de sostenibilidad y gobernanza.

En la **tercera fase** realizamos una búsqueda y revisión de temas (fase hermenéutica). Realizamos una comparación transversal entre programas para identificar patrones comunes y diferencias relevantes. Cada documento fue examinado para identificar evidencia explícita que permitiera interpretar cómo estos programas funcionan como dispositivos psicosociales que integran herramientas, tiempos y espacios diseñados para intervenir en situaciones de crisis. Finalmente, en la **cuarta fase** integramos los indicadores en descripciones analíticas sintéticas para evitar la fragmentación, priorizando las dimensiones transversales por encima de descripciones extensas por país, facilitando así su integración final en los resultados del estudio.

Análisis

El análisis de los documentos fue realizado mediante análisis temático, siguiendo las fases propuestas por Braun y Clarke (2006) y los lineamientos de análisis documental de Martínez y colegas (2023). El proceso incluyó la generación de códigos iniciales, la categorización temática y la comparación transversal entre programas para identificar patrones comunes y diferencias relevantes. Las categorías principales de análisis incluyeron: reducción de la pobreza y seguridad económica, salud y bienestar, autonomía en decisiones laborales y educativas, cohesión social y retos estructurales de sostenibilidad y gobernanza. Además, examinamos cómo los programas funcionaban como dispositivos psicosociales orientados a intervenir en contextos de crisis y desigualdad social. Finalmente, los hallazgos fueron integrados en descripciones analíticas sintéticas orientadas a resaltar dimensiones transversales entre los distintos contextos estudiados.

Resultados

El análisis comparativo de los programas de IBU e IB examinados permitió identificar un conjunto de beneficios transversales, así como límites estructurales asociados a su diseño e implementación. A diferencia de una presentación descriptiva por país o programa, esta sección integra los resultados y los organiza en torno a dimensiones analíticas relevantes para comprender los efectos del IBU e IB. Esta aproximación facilita el diálogo directo con el marco de la PTO y evita la reiteración empírica.

Seguridad económica, pobreza y estabilidad material

Uno de los beneficios más consistentes observados en los programas de IBU e IB analizados es la mejora de la seguridad económica y la reducción de la pobreza, en particular entre hogares expuestos a altos niveles de vulnerabilidad. En contextos diversos como Kenia,

Brasil, Alaska e Irán, las transferencias monetarias regulares contribuyeron a estabilizar el consumo, facilitar la cobertura de necesidades básicas y reducir la exposición a privaciones extremas (Agência Brasil, 2023; Banerjee et al., 2023; Berman, 2024; Flórez, 2020; Tena, 2018). Estos efectos fueron especialmente notables en hogares de menores ingresos, en zonas rurales o en regiones históricamente marginadas (Eckas, 2021; Guettabi, 2019; Jesus et al., 2025; Largo, 2025).

No obstante, los resultados también evidencian retos relevantes. En los esquemas de IBU, la sostenibilidad financiera se presenta como un desafío central, especialmente cuando el financiamiento depende de fuentes volátiles o no renovables (Berman, 2024; Institute of the North, 2021; Tena, 2018). En los programas de IB, si bien los impactos distributivos fueron significativos, persistieron riesgos de exclusión y de dependencia de criterios administrativos que pueden afectar la continuidad del apoyo económico (Falcão Silva et al., 2023; Jaatinen, 2022; Johnson et al., 2024; Mathebula, 2021). En ambos casos, la estabilidad material lograda depende de arreglos institucionales que no siempre se mantienen a largo plazo.

Salud, bienestar y estrés psicosocial

El IBU e IB también se asocian con beneficios relevantes en la salud física, la salud mental y el bienestar subjetivo, particularmente en poblaciones expuestas a la pobreza estructural (García-Ramos & Morales, 2022). En varios programas de IB- Brasil (Agência Brasil, 2023; Falcão Silva et al., 2023; Jesus et al., 2025; Largo, 2025), Kenia (Banerjee, 2023; Eckas, 2021; Flórez, 2020; Jaatinen, 2022; Mathebula, 2021) y Barcelona (Blanco, et al., 2021; Riutort, et al., 2023)- se documentaron mejoras en indicadores de salud vinculados a una mayor seguridad alimentaria, acceso más consistente a servicios de salud y reducción de factores de riesgo

asociados a la privación material. Además, se observaron incrementos en el bienestar subjetivo y en la percepción de estabilidad personal entre las personas beneficiarias.

Sin embargo, estos efectos no son homogéneos ni ilimitados. En algunos casos, las mejoras en salud y bienestar fueron más pronunciadas durante la fase inicial de implementación y tendieron a estabilizarse con el tiempo, por ejemplo, en Kenia (Eckas, 2021; Flórez, 2020) y en Barcelona (Blanco et al., 2021; Riutort et al., 2023). También, cuando los programas estuvieron sujetos a interrupciones, incertidumbre política o condicionalidades estrictas, los beneficios psicosociales se vieron parcialmente atenuados, lo que evidencia la sensibilidad del bienestar ante la percepción de la continuidad y la seguridad del ingreso.

Autonomía, agencia laboral y decisiones educativas

Otro hallazgo transversal es el fortalecimiento de la autonomía personal y de la agencia en las decisiones laborales y educativas. En distintos contextos —Irán, Barcelona y Kenia—, el IBU e IB permitieron a las personas beneficiarias ampliar su margen de acción frente al mercado laboral, facilitando la permanencia en el sistema educativo y la realización de transiciones ocupacionales voluntarias (Blanco et al., 2021; Eckas, 2021; Tena, 2018). Estos efectos, que incluyen la búsqueda de mejores condiciones de empleo, fueron particularmente visibles entre jóvenes, mujeres jefas de hogar y personas en situaciones laborales precarias (Flórez, 2020; Riutort et al., 2023).

Al mismo tiempo, se identifican límites importantes, ya que la capacidad de ejercer agencia laboral no solo puede vincularse a contar con un ingreso garantizado, sino de la disponibilidad de oportunidades reales. En contextos con mercados altamente segmentados o con escasa oferta de empleo de calidad, el IBU y el IB pueden ampliar la autonomía, pero no eliminan las restricciones estructurales, como el acceso a la educación formal, que operan como

determinantes contextuales de las trayectorias ocupacionales (Blanco et al., 2021; Eckas, 2021; Flórez, 2020; Riutort et al., 2023; Tena, 2018).

Retos estructurales: Sostenibilidad, condicionalidad y gobernanza

Más allá de los beneficios identificados, el análisis revela límites estructurales recurrentes que atraviesan los programas de IBU e IB. La sostenibilidad financiera constituye uno de los desafíos más persistentes, especialmente en esquemas universales o de gran escala. La dependencia de fuentes de financiamiento específicas, la volatilidad económica y las presiones presupuestarias (Berman, 2024) introducen incertidumbre sobre la continuidad a largo plazo de los programas.

Asimismo, la condicionalidad y la focalización generan tensiones relacionadas con la cobertura, la estigmatización y la complejidad administrativa. Aunque estos mecanismos permiten dirigir recursos a poblaciones específicas, también pueden reproducir relaciones de dependencia institucional y afectar la percepción del ingreso como un derecho. El caso de Nueva Zelanda (Murray & Pateman, 2012; Rankin, 2016) ilustra un diseño institucionalmente estable e integrado al sistema tributario, que destaca por su previsibilidad y eficiencia administrativa, pero cuyos efectos sobre dimensiones psicosociales como la autonomía laboral y el bienestar subjetivo resultan más limitados que los observados en esquemas de transferencias monetarias directas. A ello se suman retos de gobernanza vinculados a los ciclos políticos, a la legitimidad social y a las narrativas culturales sobre la ética del trabajo asalariado.

Discusión

Esta sección integra la discusión de los hallazgos principales del análisis comparativo desde el marco de la PTO, destacando sus aportes teóricos y empíricos y examinando la pertinencia de explorar un piloto de IB y, eventualmente, de IBU en Puerto Rico. Lejos de

reiterar los resultados, la discusión se centra en interpretar las implicaciones para la comprensión contemporánea del trabajo, la pobreza y las dimensiones psicosociales.

Implicaciones para la Psicología del Trabajo y las Organizaciones

En conjunto, los resultados analíticos confirman que los programas examinados de IBU e IB, con sus diferencias de diseño y contexto, comparten beneficios relevantes en la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de la seguridad económica y la mejora de dimensiones psicosociales clave como el bienestar, la salud mental y la autonomía personal. Estos hallazgos respaldan planteamientos centrales de la PTO que subrayan el rol de las condiciones materiales como determinantes del funcionamiento psicológico y laboral.

Desde la PTO, los hallazgos anteriores confirman que la seguridad económica constituye una condición psicosocial fundamental que influye en el bienestar, la toma de decisiones laborales y la capacidad de sostener trayectorias ocupacionales estables (Jahoda, 1982; Blustein, 2006; Hüffmeier & Zacher, 2021). La reducción del estrés económico crónico y de la incertidumbre cotidiana actúa como un mecanismo protector frente al agotamiento emocional y otros problemas de salud mental, creando condiciones favorables para el funcionamiento laboral y la planificación personal.

Por su parte, la autonomía potenciada por los programas estudiados constituye una dimensión central de la motivación intrínseca (Deci & Ryan, 2000). El IBU e IB parecen reforzar la agencia de las personas trabajadoras al aumentar su percepción de control y capacidad de decisión. No obstante, los límites estructurales identificados —como la fragilidad económica e institucional y la dependencia de criterios administrativos— inciden directamente en las condiciones psicosociales del trabajo al influir en la seguridad percibida, la autoestima y el significado atribuido al ingreso no laboral (Hüffmeier & Zacher, 2021). La forma en que se

diseñan estos programas legitima y condiciona su impacto psicológico, particularmente en sociedades donde el empleo continúa siendo un criterio principal de reconocimiento e identidad social.

Al mismo tiempo, los resultados matizan las expectativas idealizadas sobre el IBU e IB. Si bien las transferencias de estipendios monetarios regulares amplían la agencia de las personas trabajadoras y reducen el estrés financiero crónico, sus efectos no son automáticos ni ilimitados. La sostenibilidad institucional, la estabilidad política y el acceso real a oportunidades educativas y laborales emergen como factores contextuales que inciden en el impacto de estas políticas sobre el bienestar y las trayectorias ocupacionales. Estos límites refuerzan la necesidad de analizar estas transferencias como parte de arreglos institucionales más amplios y no como intervenciones aisladas.

Desde una perspectiva teórica, el estudio aporta al campo de la PTO al ampliar su objeto de estudio más allá del empleo. Siguiendo a Hüffmeier y Zacher (2021), los resultados muestran que desvincular parcialmente el ingreso del empleo no implica necesariamente desmotivación ni retraimiento laboral. Por el contrario, puede facilitar formas más autónomas, amplias y justas de trabajo, que incluyan las actividades de cuidados y comunitarias, particularmente en contextos de precariedad estructural. La integración de enfoques de justicia social permite comprender cómo la automatización y la digitalización redistribuyen de manera desigual los riesgos y beneficios del progreso tecnológico, lo que refuerza la pertinencia de políticas redistributivas con efectos psicosociales.

En suma, la evidencia revisada sugiere que el IBU e IB constituyen una herramienta relevante para repensar el vínculo entre el trabajo, bienestar y ciudadanía, desafiando supuestos tradicionales del campo y abriendo nuevas líneas de investigación en PTO.

Puerto Rico como caso crítico: Hacia un piloto de Ingreso Básico Universal

A la luz de estos hallazgos, Puerto Rico emerge como un caso crítico para examinar la aplicabilidad y la pertinencia de un IBU desde una perspectiva psicosocial y comparativa. Este territorio colonial presenta niveles persistentes elevados de pobreza estructural, con una proporción significativa de su población —particularmente niños, niñas y personas adultas mayores— expuesta a privaciones económicas sostenidas (Hinojosa et al., 2023). Estas condiciones no responden únicamente a ciclos económicos recientes, sino también a dinámicas históricas de dependencia económica, desigualdad territorial y fragilidad institucional.

La economía puertorriqueña se encuentra especialmente expuesta a procesos de automatización y transformación tecnológica, en sectores como la manufactura farmacéutica, los servicios administrativos y ciertas áreas del comercio (López, 2024; Maldonado, 2025). Aunque estas transformaciones pueden generar ganancias en productividad, también incrementan el riesgo de desplazamiento laboral, polarización del empleo e incertidumbre ocupacional, reproduciendo patrones observados en otros contextos altamente automatizados.

Puerto Rico presenta una alta dependencia de las transferencias federales como mecanismo central de protección social. Si bien estas transferencias han funcionado como amortiguadores temporales, suelen permanecer fragmentadas, condicionadas y sujetas a los vaivenes políticos, partidistas y administrativos.

Esta configuración produce una paradoja: una amplia dependencia de las transferencias federales, cuatriplicadas desde 2016, coexisten con elevados niveles de desigualdad, inseguridad económica (Segarra Alméstica, 2026) y estrés financiero. El panorama anterior hace especialmente vulnerables a las personas que subsisten con empleos precarios. En conjunto, estas características hacen de Puerto Rico un contexto particularmente relevante para explorar

intervenciones que garanticen mayor estabilidad material y equidad, y que reduzcan la vulnerabilidad psicosocial asociada a la pobreza y la inestabilidad laboral, aportando evidencia situada a un debate dominado por experiencias del Norte Global.

Un proyecto piloto en Puerto Rico permitiría examinar empíricamente cómo un IB, y luego un IBU, influye en la agencia laboral, entendida como la capacidad de tomar decisiones significativas sobre el empleo, la educación y otras formas de participación social. Además, ofrecería una oportunidad para analizar procesos de reconversión ocupacional, facilitando transiciones laborales más saludables en un contexto de creciente automatización, sin forzar la aceptación inmediata de empleos precarios. Desde la PTO, un aspecto central de este piloto sería su enfoque evaluativo, que integre indicadores económicos (por ejemplo, nivel de ingresos o capacidad adquisitiva) con variables psicosociales como el bienestar subjetivo, el estrés financiero, la salud mental, la autonomía percibida, el sentido y el significado del trabajo. Este enfoque permitiría generar evidencia robusta sobre los mecanismos mediante los cuales el IB e IBU afectan la relación entre pobreza, trabajo y bienestar, contribuyendo tanto al avance teórico del campo como al diseño de políticas sociales más sensibles a las experiencias reales de las personas trabajadoras.

Conclusión

El propósito de este estudio fue analizar comparativamente los beneficios y retos de programas de IBU e IB implementados en distintos continentes, interpretando sus efectos desde el marco de la PTO. La evidencia revisada muestra que, pese a diferencias significativas en el diseño institucional y en el contexto de implementación, estos programas comparten beneficios relevantes en la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de la seguridad económica y la

mejora de condiciones psicosociales clave, como el bienestar, la salud mental, la autonomía y la agencia laboral.

Desde la perspectiva de la PTO, el IBU e IB pueden entenderse como intervenciones estructurales que inciden directamente en la forma en que las personas se relacionan con el trabajo en contextos de precariedad, automatización y desigualdad estructural. Los resultados analizados sugieren que garantizar una base material mínima contribuye a reducir el estrés financiero crónico, ampliar el margen de decisión frente al mercado laboral y facilitar trayectorias educativas y ocupacionales más sostenibles, sin que ello implique necesariamente una desvinculación del empleo. Estos programas cuestionan supuestos tradicionales que derivan la motivación, el bienestar y la productividad exclusivamente del empleo.

No obstante, estos hallazgos deben interpretarse a la luz de ciertas limitaciones estructurales y metodológicas. En primer lugar, el estudio se basó en fuentes primarias y secundarias, lo que implica una dependencia de la calidad, el alcance y los enfoques analíticos de los estudios originales revisados. Asimismo, la heterogeneidad de los programas analizados — que incluyen esquemas universales y focalizados (básicos), y distintos mecanismos de financiamiento— dificulta la generalización de los resultados a un único modelo de ingreso básico. A ello se suma que la mayoría de las experiencias documentadas corresponden a programas de IB más que a IBU en sentido estricto, lo que refleja la realidad empírica actual, pero limita las inferencias sobre esquemas plenamente universales.

Estas limitaciones no invalidan los aportes del estudio, sino que subrayan la necesidad de comprender el IBU e IB como políticas situadas, cuyos efectos dependen de arreglos institucionales más amplios, de su sostenibilidad financiera, de su diseño y de su legitimidad social. En este sentido, el diseño e implantación de un IBU o de un IB no constituyen soluciones

simples ni generalizadas, sino intervenciones complejas cuyos impactos psicosociales pueden verse potenciados o restringidos por condiciones políticas, económicas y culturales particulares.

En este marco, el IBU e IB se configuran no solo como una política social relevante, sino también como una línea de investigación emergente para la PTO, particularmente en el análisis del futuro del trabajo y de las condiciones que sostienen el bienestar en contextos de alta desigualdad que integran la automatización. El examen del caso de Puerto Rico ilustra la pertinencia de avanzar hacia estudios empíricos contextualizados que permitan evaluar, desde la PTO, cómo un ingreso garantizado podría incidir en la pobreza y la desigualdad estructural, la estabilidad laboral y el bienestar psicosocial en territorios con alta dependencia de transferencias monetarias federales y mercados laborales frágiles.

Explorar diseños pilotos con enfoques evaluativos que integren variables económicas y psicosociales representa una oportunidad para generar evidencia situada y rigurosa. Esto enriquecería tanto el debate académico como el diseño de políticas públicas más sensibles a las experiencias reales de las personas trabajadoras. En este sentido, el estudio invita a continuar investigando el IBU e IB no como respuestas normativas cerradas, sino como dispositivos analíticos y empíricos clave para repensar el trabajo, la ciudadanía y el bienestar en el siglo XXI.

Referencias

- Agência Brasil. (2023). *Caixa begins paying Bolsa Família in September*.
<https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2024-09/caixa-comeca-pagar-bolsa-familia-de-setembro>
- Bag, T. (2023). Socio-economic impacts of scientific-technological advancements.
International Journal of Multidisciplinary Educational Research, 12(8), 70–99.
- Banerjee, A., Faye, M., Krueger, A., Niehaus, P., & Suri, T. (2023). *Universal basic income: Short-term results from a long-term experiment in Kenya*. <https://basicincome.org/wp-content/uploads/2023/12/Give-Directly-Kenya-report-2-years.pdf>
- Berman, M. (2024). A rising tide that lifts all boats: Long-term effects of the Alaska Permanent Fund Dividend on poverty. *Population and Policy*, 10(2), 1–19.
<https://doi.org/10.1002/pop4.398>
- Bhargava, A., Bester, M., & Bolton, L. (2021). Employees' perceptions of the implementation of robotics, artificial intelligence, and automation (RAIA) on job satisfaction, job security, and employability. *Journal of Technology in Behavioral Science*, 6(1), 106–113.
<https://doi.org/10.1007/s41347-020-00153-8>
- Blanco, I., Marra, G., Fernández, C., Badosa, J., Riutort, S., Julià, A., Laín, B., & Torrens, L. (2021). *Resultados finales del proyecto piloto B-MINCOME (2017–2019)*. Ayuntamiento de Barcelona.
<https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxiu-documents/informe-integracion-resultados-bmincome-es.pdf>
- Blustein, D. L. (2006). *The psychology of working: A new perspective for career development, counseling, and public policy*. Lawrence Erlbaum.

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Canals, C. (2017). *El desempleo tecnológico*. OBS Business School, Universidad de Barcelona.
- Colón Reyes, L. (2023). *La herencia de la exclusión: desigualdad y pobreza. Puerto Rico, siglo XXI*. Publicaciones Gaviota.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
- Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. (2026). *Empleo y desempleo en Puerto Rico: Noviembre de 2025* (Encuesta de Grupo Trabajador). Negociado de Estadísticas del Trabajo, Gobierno de Puerto Rico.
- Eckas, A. (2021, March 18). *Examining the Universal Income Project in Kenya*. The Borgen Project. <https://borgenproject.org/universal-basic-income-in-kenya/>
- Falcão Silva, T., Campante Vale, R., Dominici Cricci, B., Lara Ibarra, G., & Posadas, J. (2023). New Bolsa Família: Challenges and opportunities for 2023 (World Bank Policy Note No. P174836). World Bank Group. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/17483603c61cc0340919c0e3fb2f03db>
- Flórez, J. D. (2020). *Efectos persistentes de los experimentos aleatorios sobre el desarrollo en Kenia*. Universidad de los Andes.
- Floridi, L. (2014). Technological unemployment, leisure occupation, and the human project. *Philosophy & Technology*, 27, 143–150. <https://doi.org/10.1007/s13347-014-0166-7>

- García-Ramos, T. (2014). Políticas de vida digna: Propuesta para atender la crisis del trabajo. *Trabajo y Sociedad*, 22, 437–446. <http://www.unse.edu.ar/trabajosociedad/>
- García-Ramos, T., & Morales, X. (2022). Mirada mundial de programas de ingreso básico (universal) desde una perspectiva utópica del postrabajo. En J. Orejuela, M. García Rubiano, y L. Villada Arango (Eds.), *Psicología de las organizaciones y del trabajo: Apuestas de investigación III* (pp. 65–96). Fondo Editorial CEIPA y ASCOFAPSI.
- Georgieva, K. (2024). *AI will transform the global economy. Let's make sure it benefits humanity*. IMF Blog. <https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2024/01/14/ai-will-transform-the-global-economy-lets-make-sure-it-benefits-humanity/>
- Gorz, A. (1995). *Metamorfosis del trabajo: Búsqueda de sentido*. Editorial Sistema.
- Guettabi, M. (2019). *What do we know about the effects of the Alaska Permanent Fund Dividend?* Institute of Social and Economic Research, University of Alaska Anchorage.
- Hinojosa, J., Bonilla, Y., Vargas-Ramos, C., Colón Meléndez, L., Soldevila Irizarry, J. R., & Figueroa-Lazu, D. (2023). *Pervasive poverty in Puerto Rico: A closer look*. CentroPR.
- Hüffmeier, J., & Zacher, H. (2021). The basic income: Initiating the needed discussion in industrial, work, and organizational psychology. *Industrial and Organizational Psychology*, 14(4), 531–562. <https://doi.org/10.1017/iop.2021.91>
- Institute of the North. (2021). *Making the Permanent Fund permanent*. <https://institutenorth.org/wp-content/uploads/2021/01/Institute-of-the-North-Position-Paper-Web.pdf>
- Ivanov, M. I., Ghercă, A. M., & Gafencu, L. N. (2025). Artificial intelligence and sustainable

- development: Reducing food waste, building resilient organisations, and enhancing public financial administration. *BRAIN: Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience*, 16(1), 243–260. <https://doi.org/10.70594/brain/16.1/18>
- Jaatinen, J. (2022). *Universal basic income: A feasible development policy for fragile states?* [Master's thesis, Lund University].
- Jahoda, M. (1982). *Employment and unemployment: A social-psychological analysis*. Cambridge University Press.
- Jesus, G. S., Gestal, P. F. P. S., Silva, A. F., Cavalcanti, D. M., Lua, I., Ichihara, M. Y., Barreto, M. L., Boccia, D., Sanchez, M. N., & Rasella, D. (2025). Effects of conditional cash transfers on tuberculosis incidence and mortality according to race, ethnicity, and socioeconomic factors in the 100 million Brazilian Cohort. *Nature Medicine*, 31(2), 653–662. <https://doi.org/10.1038/s41591-024-03381-0>
- Johnson, B., Molina, A., Hermann, M., & Aggarwal, S. (2024). The Alaska Permanent Fund Dividend increases residential payments for water services. *Environmental Science: Advances*, 3(2), 186–197. <https://doi.org/10.1039/D3VA00219E>
- Kabeer, N. (2020). *Women's economic empowerment and inclusive growth: Labour markets and enterprise development*. UK's Department for International Development (DFID) & International Development Research Centre (IDRC).
- Kvirchishvili, L. (2024). The evolving workforce: Technological advancements and their impact on employee skills and characteristics. En R. C. Geibel y S. Machavariani (Eds.), *Digital management to shape the future. ISPC 2023. Springer Proceedings in Business and Economics* (pp. 81–96). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-66517-2_7
- Largo, J. M. (2025, February 20). Esto es lo que reciben los beneficiarios del ingreso mínimo

- garantizado en 2025: Hay transferencias que superan el medio millón de pesos. *Infobae*.
<https://www.infobae.com/colombia/2025/02/20/esto-es-lo-que-reciben-los-beneficiarios-del-ingreso-minimo-garantizado-en-2025-hay-transferencias-que-superan-el-medio-millon-de-pesos/>
- López, S. (2024, March 3). Aumento en las exportaciones impulsan la economía: La manufactura fue el sector industrial de mayor contribución. *El Vocero*.
https://www.elvocero.com/economia/aumento-en-las-exportaciones-impulsan-la-economia/article_27ae7726-e55c-11ee-90c4-e3b9156a149d.html
- Maldonado, M. (2025). *Toma de decisiones mediada por la inteligencia artificial para la gestión de conflictos organizacionales* [Doctoral dissertation, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras]. Departamento de Psicología.
- Martínez, J. I., Palacios, G. E., & Oliva, D. B. (2023). Guía para la revisión y el análisis documental: Propuesta desde el enfoque investigativo. *Revista Ra Ximhai*, 19(1), 67–83.
<https://doi.org/10.35197/rx.19.01.2023.03.jm>
- Mathebula, B. (2021). *The universal basic income grant (UBIG): A comparative review of the characteristics and impact. Social Policy in Demand: A Working Series*, 2021(1), 1–52.
<https://doi.org/10.18418/978-3-96043-089-6>
- Meyer, N., & Hamilton, L. (2020). Female entrepreneurs' business training and its effect on various entrepreneurial factors: Evidence from a developing country. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 12(1), 135–151.
<https://doi.org/10.34109/ijefs.202012109>
- Murray, M., & Pateman, C. (Eds.). (2012). *Basic income worldwide: Horizons of reform*. Springer.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *Using artificial intelligence in public financial management*. OECD Publishing.

<https://one.oecd.org/document/GOV/SBO%282024%2914/en/pdf>

Ortiz, C. H. (2023). Minimum wage, unemployment insurance, and universal basic income in a wealth concentration process: A theoretical approach. *Lecturas de Economía*, 98, 7–37.

<https://doi.org/10.17533/udea.le.n98a348515>

Ramírez, I. E. (2023). *Un Ingreso Básico Universal para Puerto Rico: Consideraciones generales* [Tesis de Maestría, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras].

<https://repositorio.upr.edu/bitstream/handle/11721/3318/Tesis%20version%20final.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

Rankin, K. (2016). Basic income as public equity: The New Zealand case. En J. Mays, G.

Marston, & J. Tomlinson (Eds.), *Basic income in Australia and New Zealand* (pp. 29–51). Palgrave Macmillan.

Ríos González, I. (2024, abril 11). Panorama general de la situación económica en Puerto Rico: un contexto al mensaje de Estado del Gobernador. *Boletín Momento Crítico*.

<https://www.momentocritico.org/post/panorama-general-de-la-situacion-economica-de-puerto-rico-un-contexto-al-mensaje-de-estado-del-gobernador>

Riutort, S., Laín, B., & Julià, A. (2023). Basic income at municipal level: Insights from the Barcelona B-MINCOME pilot. *Basic Income Studies*, 18(1), 1–30.

SDC-PR Bulletin. (2025). *Poverty and inequality indicators in Puerto Rico: 2019–2023*. Puerto Rico Statewide Comprehensive Development Program.

Segarra Alméstica. E. (2026). *Promesa, institucionalidad y expectativas de futuro*. Conversatorio

Promesa a 10 años: Cumplida, Rota o Indefinida. Facultad de Ciencias Sociales.

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

Sverke, M., Hellgren, J., & Näswall, K. (2002). Job insecurity: A literature review. *International Journal of Psychology*, 37(3), 229–242. <https://doi.org/10.1080/00207590244000051>

Tena, A. (2018). La renta básica universal basada en la evidencia. *Política y Sociedad*, 55(3). <https://doi.org/10.5209/POSO.58497>

World Economic Forum. (2023). *The future of jobs report 2023*. World Economic Forum. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2023.pdf

Zajko, M. (2022). Artificial intelligence, algorithms, and social inequality: Sociological contributions to contemporary debates. *Sociology Compass*, 16(3), e12962. <https://doi.org/10.1111/soc4.12962>

Zamani, E. D., Smyth, C., Gupta, S., & Dennehy, D. (2023). Artificial intelligence and big data analytics for supply chain resilience: A systematic literature review. *Annals of Operations Research*, 327(2), 605–632.